
Amnistía Internacional

Irak: La necesidad de seguridad

Julio de 2003

Resumen

Índice AI: MDE 14/143/2003/s

«Nadie está a salvo.» «Necesitamos seguridad, no comida.» «Tenemos demasiado miedo para salir.» Sentimientos como éstos han sido expresados una y otra vez por iraquíes a los equipos de delegados de Amnistía Internacional en Basora, en el sur de Irak, desde el 24 de abril.

En Basora, el clima de miedo e inseguridad es abrumador. Han disminuido los saqueos y la búsqueda entre los escombros de edificios públicos que fueron generalizados en los primeros días de la ocupación, pero la delincuencia, a menudo violenta, sigue siendo mucho más elevada que antes de la ocupación. No se dispone de estadísticas, pero las entrevistas mantenidas con abogados, policías y jueces indican que el robo de propiedades públicas y privadas es omnipresente y en muchos casos va acompañado del uso de armas de fuego. Según los informes, todos los días se producen asesinatos por enemistades personales o venganza política. Los secuestros para obtener grandes sumas de dinero de la familia de la víctima son también habituales. Muchas mujeres y niñas han dejado de salir solas a la calle, aterrorizadas ante la posibilidad de convertirse en la próxima víctima de un secuestro, una violación u otro acto violento.

Este informe resume un documento titulado *Irak: La necesidad de seguridad* (Índice AI: MDE 14/143/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en julio de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. Pueden encontrar amplia documentación sobre éste y otros asuntos en el sitio web de Amnistía Internacional <<http://www.amnesty.org>> (en inglés), así como recibir comunicados de prensa por correo electrónico en <<http://web.amnesty.org/ai.nsf/news>>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en <<http://www.edai.org>>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Amnistía Internacional

Irak: La necesidad de seguridad



Julio de 2003
Índice AI: MDE 14/143/03/s

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE

INFORMACIÓN GENERAL	1
SAQUEOS.....	2
MUJERES Y NIÑAS ATEMORIZADAS	3
SECUESTROS.....	4
HOMICIDIOS POR VENGANZA	5
LA CRISIS POLICIAL	6
MALOS TRATOS.....	7
HERIDAS Y MUERTES DE CIVILES.....	9
RECOMENDACIONES	10

Irak:

La necesidad de seguridad

«Nadie está a salvo.» «Necesitamos seguridad, no comida.» «Tenemos demasiado miedo para salir.» Sentimientos como éstos han sido expresados una y otra vez por iraquíes a los equipos de delegados de Amnistía Internacional en Basora, en el sur de Irak, desde el 24 de abril.

En Basora, el clima de miedo e inseguridad es abrumador. Han disminuido los saqueos y la búsqueda entre los escombros de edificios públicos que fueron generalizados en los primeros días de la ocupación, pero la delincuencia, a menudo violenta, sigue siendo mucho más elevada que antes de la ocupación. No se dispone de estadísticas, pero las entrevistas mantenidas con abogados, policías y jueces indican que el robo de propiedades públicas y privadas es omnipresente y en muchos casos va acompañado del uso de armas de fuego. Según los informes, todos los días se producen asesinatos por enemistades personales o venganza política. Los secuestros para obtener grandes sumas de dinero de la familia de la víctima son también habituales. Muchas mujeres y niñas han dejado de salir solas a la calle, aterrorizadas ante la posibilidad de convertirse en la próxima víctima de un secuestro, una violación u otro acto violento.

Un funcionario del Hospital Clínico de Basora declaró a los delegados de Amnistía Internacional el 23 de junio que el hospital recibía hasta cinco pacientes diarios con heridas de bala y de arma blanca. Un mes antes, ingresaban entre 10 y 20 casos al día.

Puede que haya un vacío político en Irak, pero no existe un vacío legal. Estados Unidos y el Reino Unido, como potencias ocupantes en Irak en virtud del derecho internacional, tienen la clara responsabilidad de mantener el orden público y de proteger a la población iraquí. Las potencias ocupantes han incumplido manifiestamente esta obligación. Han mostrado su falta de disposición –en cuanto a voluntad política, planificación y despliegue de recursos– para controlar el desgobierno, y millones de hombres, mujeres y niños iraquíes están pagando un precio terrible.

Este informe, basado en las investigaciones realizadas por los delegados de Amnistía Internacional en Basora en abril, mayo y junio de 2003, exige que las potencias ocupantes adopten medidas urgentes para proteger las vidas, la seguridad y el bienestar de la población iraquí. Aunque se centra en la situación de una sola ciudad, el desgobierno y la falta de seguridad están extendidos en muchas partes de Irak y la situación en Bagdad podría ser peor aún.

Información general

El hundimiento del gobierno iraquí creó un vacío político e institucional. En cuanto la ciudad de Basora cayó ante las fuerzas británicas, decenas de saqueadores, entre los que había delincuentes convictos excarcelados en la amnistía general de octubre de 2002 y otros liberados durante el caos de la guerra y los días inmediatamente posteriores, saquearon edificios gubernamentales y de instituciones públicas que se habían clausurado durante la guerra. Algunos de estos edificios los están usando ahora como sede partidos políticos que actuaban desde el exilio. Por ejemplo, el Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Irak utilizaba el edificio del teatro, la Organización Islámica del Trabajo ocupaba el edificio del Club de Oficiales, y el Congreso Nacional Iraquí empleaba el edificio del Sindicato de los Trabajadores.

Casi todas las familias de Basora y de otros lugares tienen armas, obtenidas de familiares que pertenecían a las numerosas organizaciones de seguridad y milicias, como *Feda'yi Saddam*, el Partido Baas y el Ejército de Jerusalén. Justo antes de la guerra, el gobierno iraquí repartió armas entre la población en general para ayudarles a combatir contra las fuerzas estadounidenses y británicas. El abandono y saqueo

posterior de comisarías de policía, cuarteles y edificios del Partido Baas facilitó el acceso a otras armas, como granadas de mano.¹

En el ambiente de desgobierno reinante, la gente está decidida a conservar sus armas, pues no hay nadie que les proteja de saqueadores o delincuentes. También se han recibido informes sobre homicidios por venganza, aparentemente exacerbados por los llamamientos de miembros de algunos grupos islamistas radicales tras el descubrimiento de fosas comunes, que incitaban matar a los antiguos miembros del Partido Baas.²

En esta situación, era vital que las potencias ocupantes actuaran con rapidez y decisión para establecer el orden público, dado que era su obligación en virtud del derecho internacional. Pero en los primeros días cruciales de la ocupación, según muchos testigos entrevistados por los delegados de Amnistía Internacional en Basora y otras fuentes, quedó de manifiesto que las fuerzas británicas no estaban preparadas ni dispuestas a cumplir la obligación que les imponía el derecho internacional de proteger la seguridad de los iraquíes. Poco o nada hicieron para poner fin a los saqueos o para mantener el orden, lo que ha dificultado mucho más la labor de restaurarlo después. Desde entonces, el ejército británico ha realizado esfuerzos sustanciales para restablecer tres de los elementos más esenciales para la administración de la justicia y el mantenimiento del orden público: la policía, los tribunales y las prisiones; sin embargo, el desgobierno sigue estando omnipresente. La Real Policía Militar ha entregado gradualmente la responsabilidad principal de hacer cumplir la ley a la policía iraquí. No obstante, ésta, cuya capacidad está gravemente disminuida por los saqueos y los ataques contra sus edificios y material y la agitación entre sus filas, sigue siendo débil y poco eficaz, especialmente ante este drástico aumento de delitos graves.

Saqueos

Cuando los delegados de Amnistía Internacional llegaron a Basora, el 24 de abril, se encontraron con que casi todos los edificios oficiales habían sido saqueados y algunos incendiados. Aun así, continuaba el pillaje. Cuando los delegados regresaban a un edificio al cabo de uno o dos días, se encontraban con que faltaban más elementos: el tejado, las puertas, los portones, las ventanas, incluso los ladrillos.

La Universidad de Basora quedó casi totalmente destruida y vacía, y había gente que seguía buscando material de construcción entre los escombros. Los delegados vieron los restos de la biblioteca, y libros y papeles rotos y quemados por todas partes. También vieron a un hombre que iba golpeando las paredes y se llevaba después los ladrillos en un carrito de supermercado, y a otro que arrancaba una tubería de desagüe de una pared. La destrucción era total.

El saqueo había afectado también a infraestructuras vitales, como hospitales e instalaciones eléctricas y de agua. El 14 de mayo, un alto cargo médico de la Dirección General de la Salud de Basora dijo en una entrevista con Amnistía Internacional que lo peor del saqueo de los cuatro principales hospitales y seis hospitales regionales se produjo inmediatamente después del conflicto. Las autoridades británicas seguían careciendo de fuerzas suficientes para dar seguridad de forma sistemática, y aún había saqueos, dijo a Amnistía Internacional. Algunos incidentes con disparos en los hospitales habían dejado una sensación de

¹ La Orden número 3 de la Autoridad Provisional de la Coalición, sobre control de armas, prohibió la posesión de armas pesadas y el uso de armas pequeñas en lugares públicos. Sin embargo, la orden permitía la posesión de armas pequeñas en viviendas o negocios.

² Hay que destacar que tres de los principales clérigos chiíes de Nayaf –los ayatolás Muhammad al-Sisstani, Bashir al-Najafi y Muhammad Said al-Hakim– dictaron fetuas (edictos religiosos) en las que ordenaban a sus seguidores que no realizaran actos de venganza contra miembros del Partido Baas o agentes de seguridad del gobierno anterior. Esta labor, alegaban, debía ser llevada a cabo únicamente por un gobernante legítimo.

inseguridad entre el personal, y la inseguridad, combinada con disputas sobre el salario, había paralizado las funciones de los hospitales.

El saqueo ha afectado a algo más que edificios. Incontables documentos han sido quemados y destruidos. La destrucción de documentos tendrá efectos incalculables para los iraquíes en todo los ámbitos, desde la resolución de reclamaciones de propiedad y el establecimiento de historiales académicos estudiantiles, hasta para la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

El 28 de abril los delegados llegaron a un solar situado en las proximidades de la Dirección General de Seguridad de Basora, donde los soldados británicos estaban arrojando montones de documentos. Dada la ubicación del solar y la ausencia de comunicación entre las fuerzas ocupantes y la población local, muchos iraquíes buscaban ansiosamente entre los papeles. Más tarde se estableció que éstos no procedían de la Dirección General de Seguridad, sino de las oficinas de la compañía eléctrica nacional que las fuerzas británicas estaban preparando para usar como cuartel general.

Los iraquíes decían a menudo a los delegados de Amnistía Internacional que cuando las fuerzas británicas entraron en Basora se limitaron a contemplar el saqueo y la destrucción de edificios vitales. A finales de junio, algunas instalaciones clave estaban custodiadas por un cuerpo especial de policía. Aunque se redujo la escala del pillaje, el saqueo persistente de instalaciones eléctricas y de agua siguió obstaculizando seriamente el funcionamiento de los servicios públicos.

El saqueo abarca también el robo de propiedades personales de los ciudadanos. Ningún automóvil desatendido está seguro por mucho tiempo, pues se lo llevarán o lo desmontarán para llevarse las piezas. Más inquietantes son los informes cada vez más numerosos sobre secuestros de autos, en los que se echa a los ocupantes, normalmente a punta de pistola, para robar después el vehículo. Mohammed 'Abd al-Redha Rahim, que resultó herido durante la guerra y a quien Amnistía Internacional entrevistó en Al-Motayha, en la zona de Abu Al-Khasib, el 6 de mayo, dijo que estos secuestros estaban organizados, y añadió que el aumento de este delito guardaba relación con la abundancia de armas en manos de la gente y a la venta. A finales de junio seguía habiendo muchos informes sobre robos de propiedades personales y, lo que es más grave, de asaltos a mano armada, muchos de ellos con armas de fuego.

<p>En relación con la sensación general de inseguridad en Irak, Ramiro Lopes da Silva, coordinador humanitario de la ONU para Irak, declaró el 24 de junio: «La actividad comercial es limitada, pues la gente permanece en casa, no se envía a los niños a la escuela y es evidente una mentalidad de asedio. El saqueo reiterado de infraestructuras rehabilitadas está creando una profunda sensación de frustración entre la población y la comunidad humanitaria. La limitación de movimientos del personal de la ONU afecta a la capacidad de evaluación y de entrega.»</p>

Mujeres y niñas atemorizadas

Los delegados de Amnistía Internacional se dieron cuenta casi enseguida del escaso número de mujeres que había en la calle. Hablaron con muchas mujeres, que dijeron que simplemente tenían demasiado miedo para salir solas. Los padres dijeron a Amnistía Internacional que no dejaban a sus hijas ir a la escuela porque les preocupaba que fueran secuestradas o violadas.

Amnistía Internacional entrevistó a varias mujeres que dijeron que habían sufrido hostigamiento en la calle. Al parecer, también hay casos de violencia doméstica.

Los delegados investigaron tres casos de secuestro, uno de ellos con violación, otro de asesinato y un tercer caso de violación y asesinato. El primero de ellos fue denunciado por un abogado al que entrevistó Amnistía Internacional el 7 de mayo, que el secuestro y violación de una niña en Basora, ocurrido unos días antes. Los secuestradores habían pedido un rescate a la familia de la niña, que se había pagado. La familia no

quería que se divulgara su nombre por el estigma social. Es muy raro que estos casos se denuncien a la policía por la misma razón.

Las mujeres también sufren amenazas de miembros de grupos islamistas radicales, que insisten en que se respete estrictamente el código indumentario islámico. Esto se ha producido después de declaraciones o incluso fetuas dictadas durante las oraciones por cuatro imanes radicales que prohibieron el consumo de alcohol y dijeron que las mujeres debían llevar el pañuelo islámico.

Una especialista en control de la salud del Hospital Clínico declaró a los delegados de Amnistía Internacional el 8 de mayo:

«Debido a la situación actual de inseguridad, mi vida está muy limitada. Por ejemplo, no puedo visitar a mi familia ni ir al mercado si no voy con mi esposo [...] Mis hijos viven casi encarcelados en la casa por seguridad. Por la noche empiezan los disparos y no sabes de dónde proceden, y eso es muy atemorizante [...] En la Escuela de Al-'Aqida, de la zona de Al-Jazair, dos hombres armados entraron en el centro y amenazaron a las maestras y a los niños. Por suerte se marcharon sin hacer daño a nadie.»

Secuestros

También hay muchos informes de secuestros de personas acaudaladas, en los que los secuestradores exigen elevados rescates a cambio de su libertad. Agentes de policía entrevistados por Amnistía Internacional los días 22 y 23 de junio dijeron que conocían este fenómeno, pero explicaron que rara vez se formalizan denuncias porque las víctimas y sus familias temían sufrir represalias.

- El 4 de junio, ocho personas armadas con granadas secuestraron a Fadel Mansur 'Abd al-Rahman, de 70 años, propietario de un taller mecánico, en la zona industrial de Hamdan. Estuvo secuestrado seis días. La víctima dijo al delegado de Amnistía Internacional:

«Me llevaron al otro lado del río en una pequeña barca y me tuvieron en un cuartito de una casa. Tenía que dormir sobre el piso de cemento. El tejado era metálico y hacía un calor insoportable [...] Sólo me daban caldo, pan y agua. Querían 100 millones de dinares iraquíes, pero les dije que eso era imposible y al final pagué 10.000. Me retuvieron seis días. Me insultaban brutalmente, llamándome burro y diciendo que me iban a matar si no me iba a dormir. Me entregaron en una casa al mismo tiempo que se transfería el dinero. Sé quiénes son, pero me amenazaron con matar a mis hijos si se lo decía a alguien, así que no fui a la policía.»

- El 16 de junio Samer Bassem Muhy, de unos 20 años de edad y miembro de la comunidad minoritaria sabiana, fue secuestrado en la joyería de su familia. Su tío, Sajid Muhy, contó a Amnistía Internacional:

«Eran las 12:30 del mediodía, Samer y su padre estaban saliendo de la tienda para irse a casa. Justo al lado del puesto de melones, un grupo de entre cuatro y seis hombres, envueltos en sus *kefiyahs*, salió de una camioneta descubierta de color gris; llevaban kalashnikovs. Todo el mundo se asustó. Yo estaba en la tienda. Se llevaron a Samer [...] No podemos pedir ayuda en ninguna comisaría de policía porque lo matarían. Nos llamaron y dijeron que querían 100.000 dólares; lo han aprendido de las películas americanas.»

Finalmente la familia negoció pagar 10.000 dólares. El 23 de junio seguían intentando reunir el dinero para pagar el rescate y Samer no había sido liberado.

Homicidios por venganza

Desde abril se han denunciado varios homicidios por venganza. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la violencia y el desgobierno que, si no se controla, provocará un número cada vez mayor de ataques de represalia. Entre las víctimas ha habido miembros del Partido Baas y de la Guardia Republicana, y Amnistía Internacional teme que sus familias corran también peligro de sufrir actos de violencia e intimidación. Las antiguas rivalidades entre comunidades han estallado también en violencia abierta dada la ausencia general de seguridad y autoridad. Otros homicidios por venganza parecen motivados por conflictos entre familias o personas. La naturaleza encubierta de estos homicidios hace que normalmente no se pueda establecer su motivación precisa.

«La razón de los homicidios por venganza es la ausencia de seguridad –declaró un líder de las tribus Bani Ma'ruf a los delegados de Amnistía Internacional el 7 de mayo–. No hay nadie a quien quejarse. Necesitamos policía y patrullas de policía. No hay autoridad ni imperio de la ley.» También dijo que se habían cometido ataques de represalia en Al-' Amara, y añadió que una de las razones por las que no había más era que mucha gente seguía creyendo que el Partido Baas aún podía volver al poder.

- Una víctima de un supuesto homicidio por venganza fue 'Abed Taher Iskandar, de 50 años. Maestro de escuela y miembro destacado del Partido Baas, recibió un tiro en la cabeza el 4 de mayo, cerca del Departamento de Educación de la zona residencial de Al-Jamiat, poco después de cobrar su salario. No se llevaron el dinero, lo que es un fuerte indicio de que fue víctima de un homicidio por venganza. Murió en el Hospital Clínico de Basora, donde los delegados de Amnistía Internacional entrevistaron al personal sobre el incidente.
- Los trabajadores del hospital informaron a los delegados de Amnistía Internacional de otro presunto ataque de represalia. 'Abd al-'Abbas Na'im, de 45 años, que era director del departamento de asuntos jurídicos del hospital y un alto cargo del Partido Baas, murió por disparos el 5 de mayo en su casa de Abu al-Khasib, a unos 30 kilómetros de Basora. Su hijo dijo al personal del hospital que los agresores iban enmascarados.
- El abogado defensor Husam al-Din al-Nahi informó del homicidio por venganza del propietario de un comercio, que era funcionario del Partido Baas, cometido en Al-' Ashar, el 6 de mayo. Advirtió: «Los homicidios por venganza aumentarán si continúa la ausencia de orden público [...] La gente ha encontrado documentos en los edificios de los servicios de información y seguridad en los que aparecen nombres de informantes, lo que ha desencadenado homicidios por venganza.»
- Un hombre llamado Jasim, que ingresó en el Hospital Clínico de Basora el 13 de mayo, dijo a los delegados de Amnistía Internacional que había resultado herido en un fuego cruzado cuando una banda armada intentó matar a un miembro del Partido Baas. Él y sus familiares dijeron que su pueblo, Mufa' ha Umm al-Na' j, a 15 kilómetros de Basora, era un lugar peligroso. Nadie se atrevía a salir de su casa después de las 8 de la tarde. La policía rara vez patrullaba por la zona.
- El 13 de mayo un intento de asesinar a un miembro del Partido Baas en la zona de Al-Hartha, de Basora, desembocó en enfrentamientos entre dos grupos tribales en los que al menos cinco personas perdieron la vida y otras tres fueron heridas. Según los informes, agentes de la Real Policía Militar visitaron el lugar, pero no realizaron ninguna investigación.
- El 14 de mayo, en otro incidente ocurrido en Al-Hartha, Satar Kheir-Alah Salah murió como consecuencia de una antigua enemistad entre dos grupos tribales.
- Karim Hamid Qasem al-'Azawi, barbero de 42 años y padre de 10 hijos, murió por disparos de dos pistoleros enmascarados el 14 de mayo mientras trabajaba. Su familia creía que podían haberlo matado porque era miembro del Partido Baas, pero dijeron a Amnistía Internacional que había estado encarcelado durante el anterior gobierno. Un cliente, Salah Hussein Sa' i, resultó herido de bala en la rodilla. La comisaría de policía de su distrito ya no funciona.
- El 16 de mayo los delegados de Amnistía Internacional tuvieron noticia de más homicidios por venganza cometidos la semana anterior en la ciudad de Al-' Amara. Según los informes, un hombre llamado Salam había matado a Najm ' Abud, hijo de un miembro del Partido Baas sospecho de haber ordenado la ejecución del hermano de Salam. Al parecer, la familia de Najm ' Abud respondió de inmediato, matando a Salam e incendiando su casa. No hay noticias de que se hayan investigado estas muertes.

- En otro supuesto homicidio por venganza, Shaikh 'Ali Sa'adoun, jefe de la tribu Sa' adoun, fue asesinado la noche del 4 de junio. La tribu había mantenido estrechos vínculos con el gobierno de Sadam Husein y algunos de sus miembros eran funcionarios locales. Cuatro hombres que iban en una camioneta descubierta, con las cabezas envueltas en *kefiyahs* y armados de kalashnikovs, dispararon contra el automóvil de Shaikh en una calle de la zona de Al-Janeina. Shaikh murió y otro pasajero resultó herido.
- Según los informes, grupos islamistas radicales han amenazado a personas que venden alcohol, así como a propietarios de cines y clubs nocturnos. Los días 8 y 9 de mayo dos hombres advirtieron al propietario de un club nocturno de Basora que su vida correría peligro si reabría el club, cerrado durante la guerra. Le recordaron el reciente homicidio de dos hombres por vender alcohol. El propietario sabía que otros dueños de comercios que vendían alcohol habían recibido amenazas similares, y dijo que la mayoría ya había dejado de venderlo. La intimidación había comenzado unas semanas antes, con la aparición de carteles en los que se decía que había que matar a quienes bebían alcohol.

La crisis policial

A final de junio, más de la mitad de los 6.000 agentes de policía empleados antes de la ocupación habían regresado a sus puestos. La Real Policía Militar había reclutado a nuevos agentes y en la provincia de Basora había alrededor de 2.000 agentes de policía regulares. El jefe de la Real Policía Militar dijo a los delegados de Amnistía Internacional el 5 de mayo que el número óptimo para la provincia de Basora era de unos 5.000.

La Real Policía Militar, tras realizar inicialmente actividades de aplicación de la ley, incluidas detenciones, ha devuelto gradualmente la responsabilidad principal de la actividad policial a la policía iraquí. Los agentes de policía iraquíes siguen actuando dentro del marco del Código Penal iraquí de 1969 y del Código de Enjuiciamiento Penal de 1971, aunque la Autoridad Provisional de la Coalición ha suspendido algunas de las disposiciones del Código Penal.³ La policía iraquí hacía patrullas conjuntas con miembros de la Real Policía Militar o tropas de combate; la presencia de los soldados tenía como fin, sobre todo, proteger a la policía local.

A finales de junio, la totalidad de las 13 comisarías de policía de la ciudad de Basora estaban abiertas y tenían dotación. El 22 y el 23 de junio Amnistía Internacional visitó tres de ellas: Basora, Al-' Ashar, que también es sede de una dirección general de policía, y Al-Hadi. Los agentes de estas comisarías seguían trabajando en condiciones materiales precarias, sin equipo de comunicaciones. Algunos no habían recibido todavía uniformes. Las comisarías de Basora tenían asignado ningún vehículo, y un agente entrevistado por Amnistía Internacional dijo que tenía que desplazarse en taxi para desempeñar sus funciones oficiales.

A finales de junio, pese a los esfuerzos por reequipar a la policía iraquí y devolverle las funciones policiales, el desgobierno y el clima de temor seguían dominando la vida de los habitantes de Basora, aunque a un nivel reducido. Una y otra vez decían a los delegados de Amnistía Internacional: «Necesitamos seguridad, no comida.» Los residentes seguían padeciendo las consecuencias de que las fuerzas británicas no restablecieran la seguridad en las primeras semanas tras su entrada en la ciudad.

La policía iraquí sufre las consecuencias de la destrucción de gran parte de su equipo, la marcha de muchos agentes, y el reclutamiento y la iniciación rápidas de nuevos agentes que no han recibido una formación completa. Su eficacia parece limitada. Al mismo tiempo, la mayoría de los soldados británicos carece de formación en métodos policiales y ya no están autorizados para asumir funciones de la policía. Esta crisis policial quedó vívidamente ilustrada cuando Amnistía Internacional observó a una familia que

³ La Orden número 7 de la Autoridad Provisional de la Coalición, de 9 de junio de 2003, suspendió ciertas estipulaciones del Código Penal iraquí de 1969 sobre infracciones, como las relativas a publicaciones, a la seguridad interna y externa del Estado, a las ofensas contra las autoridades públicas y funcionarios públicos y a la pena de muerte.

pedía ayuda a los soldados que estaban en el palacio presidencial de Basora el 22 de junio. La familia, claramente asustada, dijo que sus vecinos, que poseían armas de fuego, los habían amenazado de muerte y contó que los agentes de la comisaría de policía de Basora habían dicho que no podían ayudarles y los habían enviado a la Real Policía Militar. Los soldados les negaron la entrada, insistiendo en que era responsabilidad de la policía iraquí.

Un alto mando de la Real Policía Militar, así como varios oficiales del ejército británico más entrevistados por Amnistía Internacional, reconoció que llevaría tiempo examinar los antecedentes, reclutar y entrenar a una nueva fuerza policial. Indicó que los nuevos agentes de la policía recibirían tres o cuatro días de formación básica, impartida por una empresa de seguridad internacional. En algunas zonas fuera de Basora, como Maisan, se había hecho cargo la milicia tribal y los antiguos jefes de policía huyeron antes de la llegada de las tropas británicas. En estas situaciones, dijo, el objetivo sería integrar a la milicia tribal en la futura fuerza policial.

Cuando los delegados de Amnistía Internacional visitaron Basora a finales de abril no funcionaban los tribunales. A finales de junio, había jueces de instrucción en los tribunales de la ciudad de Basora. Estos jueces investigan las denuncias de delitos y, si encuentran pruebas suficientes, remiten al acusado a juicio. También tienen competencia para ordenar la prisión preventiva o la libertad bajo fianza. Los casos de personas detenidas en Basora por la policía iraquí o la Real Policía Militar como presuntos autores de delitos están aparentemente bajo la supervisión de estos jueces.

Sin embargo, no se han constituido ni examinan casos ni el tribunal de delitos menores, que tiene competencia para juzgar delitos castigados con penas de prisión o de trabajos forzados de hasta cinco años, ni el tribunal de delitos graves, que juzga las infracciones castigadas con penas mayores. Como consecuencia, no se han juzgado los casos penales, incluidos los de personas en prisión preventiva. La Casa de la Justicia, donde tendrán su sede ambos tribunales, fue inaugurada formalmente el 22 de junio y se prevé que los dos tribunales comiencen a oír casos en breve.

Las fuerzas armadas británicas han destituido a siete jueces de la provincia de Basora por ocupar los cuatro cargos más importantes del Partido Baas. Según la Orden número 1 de la Autoridad Provisional de la Coalición, la destitución de cargos públicos que desempeñen dichas funciones es preceptiva y no hay derecho de apelación. Las fuerzas británicas han establecido también un Comité Anticorrupción para estudiar las denuncias de corrupción de la judicatura.

Las prisiones y los centros de detención, al igual que otros edificios públicos de Basora, han sufrido daños y saqueos. Durante seis semanas no hubo prisiones y las fuerzas británicas trasladaron a 332 detenidos por infracciones penales e internos a un centro de detención de Umm Qasr. Se instituyó un proceso de revisión de las detenciones que ha desembocado en la liberación de casi 200 detenidos. Mientras tanto, las fuerzas británicas rehabilitaron el centro de detención de Ma' qal, que tiene capacidad para 300 reclusos. El centro está administrado por funcionarios penitenciarios iraquíes bajo la supervisión de la Real Policía Militar. Se abrió el 1 de junio y los restantes 70 detenidos de Umm Qasr fueron trasladados ahí. Sus expedientes fueron remitidos a jueces de instrucción y la mayoría quedaron en libertad bajo fianza o incondicional. El 22 de junio quedaban en el centro 37 detenidos. La Real Policía Militar informó a los delegados de Amnistía Internacional de su intención de renovar y reequipar la prisión de Sina' iyeh, en el sur de Basora, en cuanto dispongan de fondos.

Malos tratos

El 5 de mayo los delegados de Amnistía Internacional observaron un puesto de control de carreteras en la zona antigua de Basora en el que trabajaban cuatro militares británicos y dos policías iraquíes desarmados. La policía iraquí registraba los automóviles sospechosos e interrogaba a los ocupantes, bajo la supervisión de los británicos. Mientras estuvieron presentes los delegados de Amnistía Internacional, tanto el personal

británico como la policía iraquí mostraron una conducta metódica, profesional y amistosa. No hubo hostigamiento.

Sin embargo, varios iraquíes dijeron a los delegados de la organización que habían sufrido abusos a manos de oficiales y soldados de la Real Policía Militar.

- Un grupo de iraquíes dijo que habían acudido a la Real Policía Militar, en la comisaría de policía principal de Basora, para pedir protección policial frente a un grupo armado que intentaba obligarlos a marcharse del edificio donde vivían junto con otras familias. Al parecer, la policía dijo que tenían que protegerse ellos mismos. El grupo afirmó que dos días después, la Policía Militar irrumpió en el edificio y les propinó una paliza brutal. Uno de ellos, Hassam Ibrahim Hayal, enseñó a los delegados su camiseta empapada de sangre. Otro, Bader ' Abd aSalah, dijo que un soldado británico le había roto la muñeca de un puntapié. El grupo pensaba que quizá los hombres que los habían amenazado habían dicho a los británicos que eran miembros de la milicia *Feda'yi Saddam*. Tras registrar el apartamento, las tropas se llevaron a Hassam Ibrahim Hayal para atenderlo y después lo pusieron en libertad. Los hombres trasladaron su queja al recién creado comité de derechos humanos del Congreso Nacional Iraquí.

- Un civil detenido en la calle en Basora por soldados británicos dijo a Amnistía Internacional que fue maltratado y que su familia no supo lo que le había ocurrido durante un mes. Hacia las 7 de la tarde del 17 de abril, cinco soldados británicos detuvieron y registraron a Muhammad Abdelkarim Ibrahim al-Tammimi, que se dirigía a su casa desde la de su tío. Lo esposaron y le requisaron una gran cantidad de dinero que al parecer le había prestado su tío y que no le han devuelto. Después lo llevaron al cuartel general británico en Shat al-Araba, donde lo obligaron a permanecer contra la pared con las manos atadas casi una hora y un soldado le golpeó cuando pidió agua. Hacia las 9 de la noche se lo llevaron junto con otros detenidos a un lugar no identificado, donde les pusieron bolsas en las cabezas durante casi 30 minutos. Oyó cómo afilaban una espada y temió por su vida. Permaneció toda la noche en el piso, sin que le dieran agua. Dijo que al día siguiente, mientras era conducido junto con otros detenidos al campo de Umm Qasr, un soldado le pegó en la frente con la culata de su fusil y le dio patadas en las costillas. Perdió el conocimiento y otro soldado le echó agua, y después se compadeció de él y le dio agua y un cigarrillo. En el campo el trato a los detenidos mejoró y les dieron comida y agua. Sin embargo, hasta su liberación el 15 de mayo, su familia recorrió los hospitales intentando averiguar lo que le había ocurrido. La preocupación repercutió negativamente en la salud de su padre.

- La Real Policía Militar registró una vivienda familiar en Basora el 24 de mayo y, según los informes, agredió a dos personas. Hacia las 4:30 de la mañana, alrededor de una docena de tanques y vehículos blindados entró en el complejo de viviendas. Los soldados echaron abajo todas las puertas y arrojaron una granada en una de las viviendas, lo que provocó un incendio y heridas a la esposa de Baha Kazim Jawad al-Muhsin. La mujer no fue llevada al hospital hasta las 7 de la mañana aproximadamente. Baha Kazim Jawad al-Muhsin, sus dos hermanos y un guarda de seguridad permanecieron posteriormente detenidos varias horas en una base militar, donde según los informes los soldados propinaron puñetazos y patadas a Baha Kazim Jawad al-Muhsin y al guarda. Finalmente, los dos hermanos y el guardia fueron puestos en libertad, y Baha Kazim Jawad al-Muhsin fue trasladado al campo de Umm Qasr. Los informes indican que las autoridades británicas declararon que los hombres eran sospechosos de asesinato.

Otras personas se quejaron del trato que daban los soldados a los iraquíes en los puestos de control. En un caso, un médico denunció que un soldado británico le había amenazado en el hospital donde trabajaba.

- Al parecer, el 25 de abril, el soldado había acompañado a dos hombres y a un intérprete que llevaron el cadáver de una mujer al Hospital General de Basora. Dijeron que Iman Mahmud al-Mahmadawiyya, esposa de uno de los hombres, había sido asesinada por disparos de su hermano y pidieron un certificado de defunción. El doctor Sharhan dijo que cuando se negó a firmar un certificado sin examinar el cuerpo o investigar la muerte, el intérprete lo amenazó y el soldado le apuntó con su arma. Cuando los delegados de Amnistía Internacional expusieron el caso ante un oficial de la Real Policía Militar, éste declaró que no se habían practicado detenciones en relación con el asesinato de la mujer por falta de pruebas. También dijo que

los soldados británicos no llevaban armas en los hospitales, aunque los delegados vieron más tarde a soldados armados en salas de hospitales.

Las potencias ocupantes no han podido impedir el aumento de los ataques y amenazas contra propietarios de comercios y bares desde que clérigos islamistas radicales pidieron la prohibición de la venta y el consumo de alcohol.

Heridas y muertes de civiles

Los soldados británicos han matado por disparos o herido de gravedad a civiles en situaciones en las que no parece que corriera peligro la vida de nadie. Según un oficial militar británico entrevistado por los delegados de Amnistía Internacional el 23 de junio, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Real Policía Militar investiga todos los casos en los que un civil resulta herido de gravedad o muerto por las fuerzas armadas británicas. En la fecha de la entrevista no había concluido ninguna investigación en Basora. En al menos un caso, Amnistía Internacional mostró preocupación porque la investigación realizada había sido inadecuada. Los oficiales militares no han notificado a los familiares el fallecimiento por disparos o bajo custodia de sus parientes, y tampoco los han mantenido informados de los avances de las investigaciones.

- Ali Sabah Almalaki y siete miembros de su familia murieron en su casa, en Al- Zubair, en el distrito de Al-Shuhada de Basora, detrás de Al-Dorhomia. Hasna, Jamia, Hafedh, Zahra y Fatma murieron cuando un obús atravesó la pared, y Mohsen Ali cuando trató de huir del edificio. Según los informes, los soldados británicos que entraron en la casa arrojaron una granada en una de las habitaciones, lo que causó la muerte de Ali Sabah y de Naser, de 22 años.
- El 24 de abril, según los informes, una patrulla militar británica abrió fuego a corta distancia contra Hussam al-Din Ghassan Mahmoud, un joven de 17 años, en las proximidades de su casa, en el complejo de viviendas del aeropuerto internacional de Basora. El joven estaba desarmado. Dos balas le alcanzaron en el pecho y otras tres en el muslo izquierdo. Estuvo hospitalizado 10 días y fue sometido a cirugía; se prevé que sus lesiones lo dejarán incapacitado permanentemente.
- Athir Karim Khalif Muhammad al-Khafaji, un joven de 25 años recién casado, murió por disparos de un soldado británico en una estación de servicio de Al-Andalus, en la zona de al-Janeina de Basora, el 29 de abril. Según los informes, intentó saltarse la cola de vehículos, y después dio marcha atrás y chocó contra un depósito. Su tío se quejó al ejército británico, que le indicaron que se investigaría el caso. La familia acudió varias veces al Centro Civil de Operaciones Militares para averiguar los progresos de la investigación, pero no obtuvieron respuesta hasta el 21 de junio, cuando un familiar que tenía la ciudadanía estadounidense pudo entrar en el edificio. Le dijeron que la investigación no había finalizado aún.
- El 8 de mayo, la Real Policía Militar detuvo a Radi Un' ma, peón y padre de tres hijos, que murió bajo custodia ese mismo día. Durante dos días su familia visitó diferentes comisarías de policía sin poder obtener información. El 10 de mayo, los soldados británicos enviaron una nota a la casa de la familia que decía: «Radi Un' ma sufrió un ataque al corazón mientras le hacíamos preguntas sobre su hijo. Lo llevamos al hospital militar. Si desean más información, acudan al hospital.» En el hospital dijeron a la familia, que no sabía que Radi Un' ma había muerto, que no había ingresado nadie con ese nombre. Posteriormente descubrieron su cuerpo en el depósito de cadáveres. Según personal del hospital, la Real Policía Militar había entregado un cuerpo sin identificar la noche del 8 de mayo, y dijo al personal que la causa de la muerte había sido un ataque al corazón, pero no facilitó más datos, como la fecha y el lugar del fallecimiento. Funcionarios del hospital declararon más tarde a los delegados de Amnistía Internacional que la Unidad de Investigaciones Especiales de la Real Policía Militar había visitado el hospital. El 18 de mayo, un soldado de la base militar del palacio presidencial dijo a la familia que el oficial correspondiente de la Real Policía Militar tenía mucho trabajo y no podía verlos. El 19 de junio, unos soldados fueron a la casa de la familia y les dijeron que acudieran al palacio presidencial el 21 de junio, pero ese día, después de esperar dos horas, volvieron a negarles la entrada.

Recomendaciones

Las fuerzas británicas y estadounidenses, como potencias ocupantes, tienen la obligación de proteger los derechos fundamentales de la población iraquí. Deben restaurar y mantener el orden público y la seguridad, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento de La Haya.

Las tropas de combate carecen de la formación y del material adecuado para desempeñar funciones policiales, y no cabe esperar que lo hagan. Sin embargo, las potencias ocupantes tienen el deber de impedir el desmoronamiento del orden público en las zonas donde establecen el control militar. Los niveles de planificación y la asignación de recursos por parte de las autoridades británicas para asegurar las instituciones públicas y otras instituciones esenciales en Basora parecen haber sido totalmente insuficientes, tanto antes de la ocupación como en la fase inicial de ésta. A finales de junio, las fuerzas británicas habían avanzado significativamente en el restablecimiento de la policía, los tribunales y los centros de detención iraquíes y habían transferido la mayoría de las responsabilidades policiales a la policía iraquí. Sin embargo, la fuerza policial local seguía careciendo de eficacia, y el desorden en Basora continuaba amenazando el bienestar de la población.

Ante todo ello, Amnistía Internacional pide al Reino Unido:

- Que despliegue fuerzas británicas en número suficiente y con la formación y el material adecuados para restaurar el orden público, hasta que la policía iraquí pueda actuar de forma eficaz;
- Que despliegue una fuerza internacional experimentada de policía civil para ayudar a la policía iraquí a desempeñar sus funciones de orden público hasta que pueda actuar de forma eficaz;
- Que establezca con urgencia un procedimiento imparcial de examen de antecedentes para los miembros de la policía iraquí, a fin de reducir las posibilidades de restaurar la autoridad a funcionarios que podrían haber sido responsables de violaciones de derechos humanos; y que aceleren la creación de una fuerza policial eficaz;
- Que garanticen que, al ejercer o supervisar las funciones policiales, las fuerzas británicas y la policía y los funcionarios penitenciarios iraquíes no violan derechos humanos;
- Que mantengan a las víctimas y a sus familias informadas del avance de las investigaciones sobre casos de muertes o heridas causadas por fuerzas británicas, y las informen sin dilación de los resultados;
- Que garanticen que sus investigaciones son llevadas a cabo por un órgano competente, imparcial e independiente, y con apariencia de serlo, de las fuerzas contra las que se han formulado las acusaciones. Ello podría exigir el uso de la policía civil en lugar del sistema ordinario de investigación militar.

Amnistía Internacional pide a las Naciones Unidas:

- Que despliegue observadores de derechos humanos en Irak con carácter urgente para que expongan los casos y los asuntos de derechos humanos directamente ante las autoridades pertinentes en Irak y faciliten información autorizada y puntual a la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos;
- Que den prioridad a la movilización de esfuerzos internacionales para reconstruir la capacidad de la fuerza policial civil internacional, tal como exige la resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional:

- Que contribuya a los esfuerzos destinados a reformar las instituciones iraquíes en los sectores policial, judicial y penitenciario, y contribuya a las condiciones de estabilidad y seguridad en Irak, de conformidad con lo previsto en la resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU.